



**SERGIO
AGUAYO**
@sergioaguayo



Reducir insultos en las campañas facilitaría encuentros para hallar puntos en común sobre los grandes problemas nacionales.

La insultadera

Los insultos invaden las redes sociales y polarizan las campañas. Hay rencor en los términos empleados la semana pasada en X (antes Twitter). A Claudia Sheinbaum la califican de *calaca*, *lombriz* y *judía asesina*; a Xóchitl Gálvez de *vieja panzona*, *pendeja* e *iluzo*.

Coordino en El Colegio de México un proyecto sobre el odio en redes sociales y son comunes los insultos a las figuras públicas. Algunos son escritos genuinamente, pero la mayoría proviene de mercenarios contratados para alabar, agredir o mantenerse a la expectativa.

En 2023 estudiamos las elecciones para gobernadora del Estado de México. El odio existió, pero no afectó la civilidad de los comicios. Una de las razones fue que nunca se movilizaron los ejércitos de aproximadamente 100 mil *bots* (cuentas automatizadas) que cada bando tenía listos para machacar a la otra en el espacio digital. La contención, se dice, se debió a un acuerdo entre el PRI y Morena.

Si ya lo hicieron el año pasado, ¿habría posibilidades de un entendimiento similar para la presidencia? ¿No valdría la pena que el Instituto Nacional Electoral hiciera acercamientos discretos a los equipos de las contendientes? Una reducción en los insultos facilitaría encuentros privados para encontrar puntos en común sobre los grandes problemas nacionales. Me centro en la inseguridad, el tema que más importa a la ciudadanía.

Sheinbaum defiende la tesis presidencial de que todo va bien, Gálvez responde que todo va mal. Es natural que en una elección se simplifiquen al exceso las posturas y sería ingenuo esperar que se eliminen los contrastes. Pero también es posible que frenen a sus legiones de *bots* e inicien discusiones privadas para buscar puntos de consenso. Existe una larga tradición en este sentido (por ejemplo, hubo diálogos enviados entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas después de las elecciones de 1988).

Un diálogo de ese tipo podría beneficiarse del alud de investigaciones con propuestas que saldrán este año sobre seguridad. En las próximas semanas presentaremos los resultados de una investigación realizada en el Colmex sobre las estrategias de seguridad de siete presidentes. El análisis cubre el periodo que

inició con la toma de posesión de Miguel de la Madrid y concluye el 30 de noviembre de 2023. Encontramos que los siete llegaron al cargo convencidos de que tenían la fórmula para frenar el crimen organizado. Los siete fracasaron por razones detectadas en nuestra investigación.

Estudiamos 74 dependencias federales y encontramos que tuvieron suficiente dinero. Incluyendo el presupuesto de 2024, el país ha gastado en el combate de la inseguridad al menos nueve billones (millones de millones) de pesos a precios de 2022. El dinero ha sido incapaz de frenar la sangría. Según cifras de dependencias federales, desde enero de 1983 hasta noviembre de 2023 ha habido 862,275 homicidios, feminicidios y desapariciones. Las dos causas más importantes del fracaso son el exceso de presidencialismo y la ausencia del Poder Legislativo.

Cada uno de los siete presidentes analizados impuso sus ideas sobre la forma de combatir la inseguridad. Tuvieron algunos éxitos que se diluyeron por el peso de decisiones apresuradas que caen en la categoría de ocurrencias. El resultado es que México carece de una política de seguridad transexenal, integral, coherente y viable.

Los presidentes han hecho su voluntad por la escasez de frenos institucionales. El Congreso de la Unión se ha distinguido en este terreno. Las 16 comisiones sobre seguridad que tiene el Legislativo tienen un largo historial de irrelevancia atribuida a la determinación con la que han evadido su obligación de supervisar a las dependencias civiles y militares. En este sexenio, la única excepción es la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada creada en marzo de 2023. En las reuniones confidenciales ha habido encontronazos entre legisladores y uniformados.

Sería ideal que las principales candidatas cierren la llave de los insultos pagados y que pidan a los encargados de formular el programa sobre seguridad buscar puntos de acuerdo para combatir a los criminales. Omar García Harfuch y Rubén Moreira han tenido éxitos en la CDMX y en Coahuila.

En suma, hay que bajarle a la insultadera: la seguridad nos atañe a todos y todas.

Colaboró Jorge Araujo.